CAPÍTULO 3

LOS DERECHOS HUMANOS, SU PROYECCIÓN EN UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL MARCO DEL POSTCONFLICTO

LOS DERECHOS HUMANOS, SU PROYECCIÓN EN UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL MARCO DEL POSTCONFLICTO²²

JAIME CUBIDES CÁRDENAS²³
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO ²⁴
ERIKA PAOLA RAMÍREZ BENÍTEZ²⁵
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

RESUMEN

El presente capítulo del libro de investigación aborda el problema de la proyección de los Derechos Humanos en la Política de Seguridad y

²² Capítulo de libro que expone resultados en conjunto de dos proyectos de investigación (i) “Desafíos para la Seguridad y Defensa Nacional de Colombia”, del grupo de investigación “Centro de Gravedad”, reconocido y categorizado en (C) por COLCIENCIAS registrado con el código COL0104976 vinculado al Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CEESEDEN), adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra de la República de Colombia y del proyecto de investigación (ii) “Desafíos contemporáneos para la protección de Derechos Humanos en escenarios de postconflicto desde enfoques interdisciplinarios”, que forma parte de la línea de investigación Fundamentación e implementación de los Derechos Humanos, del grupo de investigación Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia, reconocido y categorizado como Tipo B por COLCIENCIAS y registrado con el código COL0120899, vinculado al Centro de Investigaciones Socio jurídicas (CISJUC), adscrito y financiado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia.

²³ Abogado y especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista y Magister en Docencia e Investigación con énfasis en las ciencias jurídicas de la Universidad Sergio Arboleda y Magister en Derecho de la misma casa de estudios, estudiante de Doctorado en Derecho en la línea de investigación de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires- Argentina. Docente Investigador y Líder del grupo de investigación Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia de la Universidad Católica de Colombia. Contacto: jacubides@ucatolica.edu.co.

²⁴ Candidata a Doctora en Derecho Internacional de la Universidad Alfonso X “El Sabio”, España. Magister en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás de Aquino, Colombia. Abogada y especialista en Derecho Internacional Aplicable a los Conflictos Armados -DICA- de la Universidad Santo Tomás de Aquino, Colombia. Investigadora y asesora del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales –CEESEDEN- de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Contacto: claugaray@hotmail.com.

²⁵ Maestranda en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra, Colombia. Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Asistente en investigación del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales –CEESEDEN- de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Contacto: epramirez@unal.edu.co.

Defensa en el marco del Postconflicto. Para esto se siguió un método cualitativo en perspectiva histórica, crítica y hermenéutica, donde se definieron como unidades de análisis: los Derechos Humanos, la Política de Seguridad y Defensa y el Postconflicto demostrando su relación triádica. Para presentar los resultados se estructuran tres ejes temáticos, en el primero se observa la importancia y trascendencia histórica de los Derechos Humanos; en el segundo se analiza la figura del Postconflicto; y en el tercero se explica la Proyección de los Derechos Humanos en una Política de Seguridad y Defensa en el marco del Postconflicto. Finalmente, se proponen unas conclusiones no para cerrar el debate sino para ampliar su aplicación.

PALABRAS CLAVE

Derechos Humanos, Políticas de Seguridad y Defensa, Postconflicto.

ABSTRACT

The present chapter of the research book addresses the problem of the projection of Human Rights in the Security and Defense Policy within the post-Conflict framework. For this, a qualitative method was followed in historical, critical and hermeneutical perspective, where they were defined as units of analysis: Human Rights, Security and Defense Policy and Post-Conflict demonstrating their triadic relationship. In order to present the results, three thematic axes were structured, in the first one the importance and historical importance of the Human Rights is observed; In the second the post conflict is analyzed and in the third one the Human Rights Projection is explained in a Security and Defense Policy within the framework of the Post conflict. Finally, conclusions are proposed not to close the debate but to broaden its application.

KEY WORDS

Human Rights, Security and Defense Policies, Post-conflict.

SUMARIO: 1. *Introducción.* 2. *Metodología.* 3. *La importancia histórica de los Derechos Humanos.* 4. *Noción de los Derechos Humanos.* 5. *Contextualización del conflicto en Colombia.* 6. *Proyección de los Derechos Humanos en mecanismos orientados a favorecer la Paz, la Seguridad y Defensa en un marco de Postconflicto.* 6.1. *Periodo de Transición.* 6.2. *Ejes centrales de la transición al Postconflicto.* 6.3. *Fuerza Pública, su papel en el cumplimiento del Acuerdo de Paz y de los retos para el Postconflicto.* 7. *Conclusiones.*

1. INTRODUCCIÓN

Como uno de los actuales desafíos en el panorama político nacional se vislumbra la proyección de los Derechos Humanos como eje fundamental de una Política en Seguridad y Defensa dada su importancia dentro del Postconflicto. En esta materia el mencionado Postconflicto, o también llamado posacuerdo por algunos doctrinantes, trae consigo cambios significativos en toda la estructura estatal. Con ello no se quiere decir que los pilares, principios y valores de un Estado cambien en función de los acuerdos a los cuales se lleguen después de los procesos de paz, antes bien, en el caso colombiano que la Constitución Política de 1991 fue fruto de un proceso de paz, que trajo consigo principios como el Estado Social de Derecho y el respeto a la dignidad humana, que se encuentran en total concordancia con un futuro Postconflicto. Por ello, las reformas estructurales estarían en cambio a aspectos administrativos, donde el cuerpo del Estado se adecúe para la solución y acompañamiento de cada uno de los requerimientos para la materialización de los acuerdos.

Sin embargo, no solo las efectivas reformas institucionales serían variables que determinen el cumplimiento de los acuerdos y un verdadero cambio hacia la paz, puesto que la protección de los Derechos Humanos entraría a convertirse en otro de los pilares o ejes indispensables en la búsqueda de una paz duradera. Y no solo de las víctimas sino también de los futuros reinsertados y la misma sociedad,

poder garantizar que cada uno de los actores que se vincularan en estos procesos de transformación, tengan una efectiva protección se convierte en un reto para el Estado quien debe salvaguardar dichas garantías. Dentro de este ámbito, también se encuentra la satisfacción de los derechos de las víctimas dentro del conflicto colombiano, los cuales como ya se mencionó, deben ser garantizados en su ejercicio por la Nación, y para lo cual los grupos insurgentes, que para el actual proceso de paz es las FARC–EP, deben colaborar enormemente.

Ahorabien, surge como cuestionamiento para esta investigación el papel que tendría la Fuerza Pública en materia de Postconflicto y garantías fundamentales, específicamente en el rol que ejercería la defensa en dicha materia. Pues aun con la futura firma del proceso de paz que se lleve en La Habana (Cuba), seguirán existiendo actores a los cuales la Fuerza Pública debe combatir, solucionando de ante mano su situación como agentes estatales que cubiertos por el Derecho Internacional Humanitario afectaron derechos y bienes jurídicamente tutelados, pero por los cuales se sustraen responsabilidades ordinarias en ese sentido.

2. METODOLOGÍA

Para dar respuesta a este interrogante se parte de una metodología cualitativa (Ruiz, 2012), donde se elaborará un estudio en perspectiva histórica, crítica y hermenéutica (Pulido, 2007) de las distintas unidades de análisis.²⁶ A saber, Derechos Humanos, Postconflicto y su proyección en una Política de Seguridad y Defensa. La investigación se desarrolló en dos momentos: una fase preliminar a través de la cual se seleccionó y organizó la información recolectada dentro de todas las fuentes consultadas; y uno crítico propositivo donde se construyó el informe final y este artículo. Por último, se

²⁶ Las unidades de análisis estarán conformadas por los estudios publicados en libros, revistas científicas nacionales e internacionales, publicaciones de organismos internacionales, normas nacionales o internacionales y principalmente en revistas científicas.

presentan unas conclusiones demostrando la conexión triádica para la elaboración de las políticas públicas en Colombia basadas en Derechos Humanos en el marco de un Postconflicto como uno de los desafíos a enfrentar en la nueva dinámica nacional.

3. LA IMPORTANCIA HISTÓRICA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Al constituirse los Derechos Humanos como aquellos Derechos inherentes²⁷ al ser humano por el simple hecho de serlo (Abrisketa, 2004), es necesario analizar su importancia a nivel histórico dado su afianzamiento como eje temático en la construcción de políticas de un Estado. La protección de los Derechos Humanos inicia con el llamado Cilindro de Ciro,²⁸ a través de él se inicia la llamada primera declaración de los Derechos Humanos, a consecuencia de su impacto consolidado en: a) la liberación de esclavos; b) la declaración del Derecho a lo que actualmente se conoce como libertad de cultos; y c) la promulgación de la igualdad de razas (Cáceres, 2015). Iniciativa que representa en sí una proclama que surge de la necesidad básica del Ser Humano al reconocimiento de su dignidad, lineamiento base del llamado *ius naturalismo*. Sin embargo, según Rodríguez (2009), relatando su concepción de los Derechos Humanos manifiesta que en la época antigua para Aristóteles es un orden político continuado del orden natural, mientras para Hobbes el orden político es el resultado de un contrato, de una convención, de una decisión tomada libremente por quienes lo adoptan convirtiéndose en lo único que puede fundamentar las bases del poder civil que sanciona las garantías y libertades de los individuos.

²⁷ La esencia de los derechos radica entonces en la unidad del ser humano que nace, vive y muere. Es de su condición de humano, de la cual emergerán sus derechos, inherentes por tanto a su naturaleza de ser vivo racional, con capacidades que lo distinguen del animal. Ese conjunto de facultades y atribuciones emergen de un valor fundamental que ha conceptualizado el ser humano: la dignidad. Como soporte único y esencial de la naturaleza humana la dignidad de la persona se expande reafirmando la necesidad de respetar la vida y la integridad del individuo como elemento clave de su evolución (Blengio, 2012, p. 5)

²⁸ Cilindro de barro cocido, con lenguaje acadio, con escritura cuneiforme. Reconocido como el primer documento germen de los Derechos Humanos.

Posteriormente a este documento, se profirieron variedad de declaraciones o instrumentos en la materia, como fue el caso de la Carta Magna de 1215, constituida como una declaración de derechos por parte del monarca al clérigo y los nobles, consagrando garantías para cada uno de estos grupos, cuyos puntos más relevantes frente a la protección de Derechos Humanos fueron:

- a) Inviolabilidad de derechos y libertades a favor de la Iglesia;
- b) Estipuló una serie de derechos sucesorios, tratamiento de las deudas y embargos;
- c) Dio facultades de independencia a los tribunales condales y de pleitos para el desarrollo de sus funciones;
- d) Legisló sobre las penas por delitos y reguló el sistema de acusaciones contra personas;
- e) Reconoció la libertad de movimiento;
- f) Limitó la carga tributaria y las multas;
- g) Reconoció la libertad para cualquiera persona de salir y regresar del reino;
- h) Estipuló que no se establecerían nuevos tributos sin el consentimiento del *Commune Consilium*. (Figueroa, 2012)

Sin alejarse de la isla Británica para el siglo XV, se elaboró la Petición de Derechos (1628) Impuesta por el Parlamento al Rey Carlos I, a través del cual se reclaman los Derechos personales y patrimoniales que el Monarca debe reconocer obligadamente como un límite (Osuna, 2001, p. 59). Junto con esta petición se realiza la proclamación del *Bill of Rights* para el año de 1689, en la cual se enunciaban cada uno de los derechos que tenían en su momento los súbditos respecto de la corona, constituyéndose por ello estas declaraciones en los antecedentes ingleses para la construcción de las posteriores declaraciones que se realizarían en América y Francia a finales del siguiente siglo. En este sentido, parafraseando su visión frente a los Derechos Humanos, el autor en mención establece que la sociedad no se basa en el llamado Derecho Natural, ni el Derecho Positivo, ni en el Derecho Divino, sino que se basa a partir de un individuo comprensible y sujeto de derechos incluso antes de existir en sociedad. De acuerdo con ello, el poder legislativo tiene su origen en el Pacto de los individuos.

Otros documentos que con igual importancia denotan el alcance de los Derechos Humanos como ejes de variación en tiempos de cambio y evolución se consolidan a través de; La carta de Virginia (1787); La Declaración Francesa de los Derecho del Hombre y el Ciudadano (1789); La carta de Derechos de Estados Unidos (1791); y La Carta de Virginia (1787). Aunque después de un debate se estipuló que no se reincorporaría a ella una Declaración de Derechos como tal, y que los Derechos Humanos al constituirse como derechos naturales superiores no precisaban de un reconocimiento positivo (Soriano, 2003, p. 205). Sin embargo, reconoce el *Habeas Corpus*, contra la falta de libertad personal o la garantía de la irretroactividad de las leyes penales. La Declaración Francesa de los Derecho del Hombre y el Ciudadano (1789), Basada en el Derecho Natural como lo establece su Preámbulo, determinándolos como inalienables y sagrados del hombre, la libertad, la propiedad y la seguridad (Starck, 2001). Visionándolos nuevamente como un eje fundamental en la construcción de un nuevo mundo.

La Carta de Derechos de Estados Unidos (1791), se vislumbró como la consolidación de los Derechos Humanos, cuando ellos siguieron el tema de la ley natural durante toda la era cristiana y hasta el siglo XIX. Los documentos políticos se basaron en gran parte en el trabajo de Locke, quien a su vez se basó en los estoicos antiguos, y según ello: “El Estado de naturaleza tiene una ley de naturaleza que lo gobierna y que obliga a todos; y la razón, que es esa ley, enseña a toda la comunidad que quiera consultarla, que siendo todos los hombres iguales e independientes, ninguno debe dañar a otro” (Higgins, 1991). Asimismo, se establece la idea de que elementos como la voluntad general son influenciados desde la teoría de Juan Jacobo Rousseau, según él: “La ley es expresión de la voluntad general, todos los ciudadanos tienen el Derecho de participar personalmente o por medio de sus representantes en su formación” (Delgado de Cantú, 2005, p. 279).

En la época contemporánea se continúa expandiendo su protección a través de documentos de trascendencia como lo son:

TABLA 1. Comparación instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos.

Instrumento	Relevancia
Carta de las Naciones Unidas (1945)	Su finalidad se centra en; practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará; la Fuerza Armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos.
Carta Internacional de los Derechos Humanos (1948)	Conformada por: La Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Instrumentos adoptados desde 1945 que han conferido una base jurídica a los Derechos Humanos inherentes y han desarrollado el conjunto de Derechos Humanos Internacionales.
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)	Promueve, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y asegura, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)	Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (1979)	Promueve la aplicación de los principios enunciados en la declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones.
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (1984)	Hace más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en todo el mundo.
Convención internacional sobre la protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990)	Frente a los problemas humanos que plantea la migración dado que son más graves en el caso de la migración irregular, a fin de evitar y eliminar los movimientos y el tránsito clandestinos de los trabajadores migratorios, asegurándoles a la vez la protección de sus derechos humanos fundamentales.
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas (2006)	Concientiza de la extrema gravedad de la desaparición forzada, que constituye un delito y, en determinadas circunstancias definidas por el Derecho Internacional, un crimen de lesa humanidad.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1999)	Asegura el mejor logro de los propósitos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

FUENTE: Elaboración propia.

4. NOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Según Cáceres (2015), los Derechos Humanos tienen una categoría ética, puesto que constituyen uno de los marcos más aceptados de lo que podría ser la ética moderna secularizada, que regula la convivencia pacífica entre los ciudadanos en una democracia; una dimensión política, puesto que hoy muchas reivindicaciones

sociales son expresadas en forma de Derechos Humanos y estos aparecen como un instrumento de crítica a la actuación de los poderes políticos. Son una categoría jurídica del Derecho Internacional Público puesto que son valores que han sido positivadas en numerosos instrumentos internacionales, en los cuales, se han definido diversos tipos de obligaciones tanto positivas como negativas. En época de crisis de paradigmas políticos, grandes sectores los invocan como una especie de sustitutos normativos frente a la relativa decadencia de oposiciones ideológicas. Por ello, tanto los gobiernos como los grupos opositores más diversos los invocan como principio de justificación de sus conductas y como arma crítica ante sus adversarios.

Para Savater (1991), son transversales a la ética, al derecho y a la política e intentan proporcionar el código donde las exigencias de estas se reúnen sin confundirse. De aquí provienen sus peculiares insuficiencias y, también, su innegable y aun creciente fascinación. Los conceptos base de los Derechos Humanos siguieron el tema de la ley natural durante toda la era cristiana y hasta el siglo XIX. A finales del siglo XVIII, las ideas derivadas de la teoría de los Derechos Naturales habían sido incorporadas en documentos políticos, basados en su mayoría en el trabajo teórico político de John Locke, quien remontó a los estoicos antiguos en su investigación sobre los Derechos Humanos: “El Estado de naturaleza tiene una ley de naturaleza que lo gobierna y que obliga a todos; y la razón, que es esa ley, enseña a toda la humanidad que quiera consultarla, que siendo todos los hombres iguales e independientes; ninguno debe dañar a otro en lo que atañe a su vida, salud, libertad o posesiones” (Longás, 2005, p. 71).

Así mismo, Rousseau aporta desde su ideología que: La ley es la expresión de la voluntad general (Rivadeneira, 2006). Todos los ciudadanos tienen el Derecho de participar personalmente o por medio de sus representantes en su formación. Y aunque esta “Ley Natural” tuvo fuertes opositores, como Bentham en Inglaterra, quien sostuvo la idea de que los Derechos Naturales se constituyen como disparates sin

fundamentos, disparates teórico, basado en que un derecho sin ley es un efecto sin causa (Stephen, 2009).²⁹

Con todo lo dicho hasta el momento, se logra deslumbrar la complejidad que integra un concepto como el de los Derechos Humanos, toda vez que son múltiples las dimensiones bajo las cuales pueden ser definidos; pero que pueden ser llevadas a un mismo fin buscando la protección de las personas. Sin embargo, es pertinente presentar lo dicho por el profesor Escobar quien manifiesta que:

Una de las definiciones que logra sintetizar todas estas expresiones es la elaborada por Pérez Luño, para quien los derechos humanos son: “Un conjunto de facultades e instituciones, que en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional” (Escobar, 2011, p. 87).

5. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONFLICTO EN COLOMBIA

El conflicto colombiano es en función del artículo segundo común a los Cuatro Convenios de Ginebra. Un conflicto de naturaleza no internacional, o en otros términos interno, el cual tiene como

²⁹ La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano: no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial. La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que este, o bien tiene el deber de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy conocemos como derechos humanos. En esta noción general, que sirve como primera aproximación al tema, pueden verse dos notas o extremos, cuyo examen un poco más detenido ayudará a precisar el concepto. En primer lugar, se trata de derechos inherentes a la persona humana; en segundo lugar, son derechos que se afirman frente al poder público (Nikken, 1994, p. 1).

característica *sine quonam* la asimetría del mismo; dado que no se trata simplemente de la confrontación entre dos contrincantes, sino la de múltiples actores, buscando sus intereses particulares contra el Estado. Por ello, la Dualidad “Conflicto -Postconflicto”³⁰ tiene una connotación singular en el presente artículo. Parafraseando a Clausewitz (2002); para lograr la paz debe existir la guerra. Esta frase que invoca la necesidad de concebir el Derecho Internacional Humanitario³¹ como un medio de sostenimiento y consolidación de la paz, y que dentro de la legalidad y la legitimidad de cualquier Estado, conlleva intrínsecamente el juzgamiento de los crímenes de guerra ocurridos en el desarrollo del conflicto y la reparación de víctimas con injerencia directa del órgano jurisdiccional competente. Es así como al hablar de Postconflicto es necesario esbozar tres factores claves: i) Principios del Derecho Internacional Humanitario; ii) Juzgamiento de los crímenes de guerra; y iii) viabilidad de la hoy llamada Justicia Transicional, cuyo inicio se fortalece a través de las llamadas comisiones de la verdad.

Por otra parte, el origen de las misiones de paz se da en el Medio Oriente con el primer grupo de observadores generado para la preservación y observación de la tregua lograda en la Primera Guerra Árabe-Israelí. Este grupo fue dispuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU (Álvarez, 2006), y aunque esta tarea ha evolucionado a través del tiempo, su esencia no ha cambiado, pues continúa centrándose en la necesidad de observar los acuerdos establecidos y mediar entre las partes proyectando dicha mediación hacia el sostenimiento de la paz alcanzada.

³⁰ Durante el siglo xix y buena parte del siglo xx, los partidos políticos tradicionales recurrieron a la violencia para dirimir las disputas por el poder y, en particular, para lograr el dominio del aparato estatal, a tal punto que este accionar puede considerarse como una constante histórica de varias décadas. En efecto, la pugnacidad política y las acciones violentas entre los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, alcanzaron su nivel más crítico en el periodo conocido como La Violencia, que comprende desde 1946 hasta 1958. Aunque la violencia liberal conservadora fue promovida por la dirigencia de ambos partidos, el enfrentamiento político se vio especialmente atizado por el sectarismo manifiesto del dirigente conservador Laureano Gómez, presidente de la República entre 1950 y 1953. A partir de entonces, el conflicto político se tradujo en una abierta confrontación armada (Centro de memoria histórica, 2014, p. 112)

³¹ El Derecho Internacional Humanitario (DIH) tiene como objetivo establecer reglas de conducta que contribuyan a disminuir el sufrimiento y los daños ocasionados por los conflictos armados; en un sentido práctico, se trata de “humanizar” la guerra (Benavidez, 2012, p. 14)

Si de lo anterior se desglosa que la principal función de las Naciones Unidas, según (Figueroa, 1991), es mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para omitir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; es pertinente establecer la importancia de ellas en Colombia y su posible aplicabilidad.

No obstante, para lograr este objetivo, es necesario antes consolidar y desglosar tres factores fundamentales como lo son: i) el conocimiento y aplicación de los principios del Derecho Internacional Humanitario en el actual conflicto armado interno; ii) el juzgamiento de los llamados Crímenes de Guerra; y iii) la consolidación del proceso de paz.

Para Campbell (2002), la construcción de procesos de paz en determinados conflictos estancados en el tiempo por el proceso de la reconciliación de las partes enfrentadas y el desarrollo de procesos de transición política, de regímenes militares a civiles, son factores que han contribuido directamente al desarrollo del Derecho Internacional Humanitario en el Postconflicto.

La actual llamada Justicia Transicional se convierte en un elemento preponderante en la coyuntura existente entre el Derecho Internacional Humanitario y la evolución de un sistema político a otro.

Esta justicia, vista por algunos doctrinantes con origen en la antigüedad y por otros como Gamboa (2006), como una concepción contemporánea democrática de la justicia que analiza la forma como sociedades afectadas por masivas violaciones de Derechos Humanos causadas por una guerra civil, un conflicto violento, o por regímenes dictatoriales, pueden hacer tránsito a regímenes democráticos en los que se puede garantizar una paz, refleja un mundo de preocupaciones políticas, morales y éticas de las Naciones, que han querido apoyadas en la Comunidad Internacional consolidar basado en los principios de transparencia, imparcialidad, verdad y equidad un nuevo sistema cuyo eje central sea el sostenimiento de la paz.

Ella se nutre a partir de las llamadas Comisiones de Verdad, proyectadas desde la reconstrucción de la verdad en la ocurrencia de los hechos a nivel histórico, a fin de lograr determinar las acciones típicas existentes al igual que sus actores, y cuyo resultado principal es la reparación de las víctimas del conflicto armado. Para Rincón (2010), las transiciones de la guerra a la paz, o de dictaduras a democracias, deben tener unos mínimos de justicia, pero así mismo, reconoce que en las transiciones operan restricciones fácticas que imponen ciertos límites a la consecución de una justicia plena. Situación que, además de hacerla ambigua, implica tensión muy fuerte de las partes y logros difíciles de conciliar, y la ha definido en algunos ámbitos como una Justicia Imperfecta.

Deja entrever lo escrito anteriormente que el Derecho Internacional desde su legislación prevé la necesidad de consolidar la paz al cese de las hostilidades (Protocolo II, 1977), brindando amnistías a individuos involucrados de alguna manera en el conflicto, vislumbrando, de esta manera, la necesidad de concretar medios y métodos que logren brindar justicia de manera imparcial basada en equidad y transparencia; lo cual, no solo es una muestra de la buena fe de la Nación por lograr la paz aceptando la transición de un régimen a otro sino reparando a las víctimas que surgen del conflicto que se desarrolló bajo su gobierno en su territorio.

El principio de legalidad y legitimidad según (Baca, 2000), el primero referido al ejercicio del poder y el segundo a la titularidad del mismo,³² integra la latente responsabilidad de los Estados frente, a quizás, todas las áreas que se pueden ver afectadas en el desarrollo de un conflicto armado y en el sostenimiento de la paz en un postconflicto. De acuerdo con ello, se crean los Tribunales Ad hoc cuya función principal es evitar la impunidad frente a los crímenes y atrocidades cometidas por individuos en el marco del conflicto.

³² Un poder es legítimo en sentido estricto cuando su titularidad tiene un sustento jurídico y es legal cuando los actos de autoridad que de él emanan se ajustan a las leyes vigentes.

El primero de ellos materializado en el Tribunal *Ad Hoc* de Nuremberg, hace alusión al primer y el más grande genocidio de la historia. Sus principios afirmaron que los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad son punibles como crímenes en virtud del Derecho Internacional. “Toda persona que cometa un acto que constituya delito de Derecho Internacional, es responsable del mismo y está sujeta a sanción” (Amnistía Internacional, 2002), aunque el delito no sea punible según la legislación nacional. Consagrando de esta manera, el juzgamiento de todos los militares e individuos que realizaron actos constitutivos de Genocidio contra los judíos y obteniendo sentencias con condenas de pena de muerte como sanción a sus acciones.

Por otra parte, la desmembración de Yugoslavia, caracterizada por los conflictos étnicos entre Bosnios y Croatas por una parte, y por otra entre Serbios y Bosnios (Vinuesa, 2002), generó el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, el cual se caracterizó por juzgar las graves violaciones a los Convenios de Ginebra (1949), las violaciones de las leyes o los usos de la guerra, y el Genocidio.

Así mismo se realiza en Ruanda en 1994, cuyo punto diferencial con los demás Tribunales es que juzgó una multitud de civiles, adultos y niños, por violaciones al artículo tercero común a los Cuatro Convenios de Ginebra, violaciones al Protocolo II de 1977 y Genocidio; en el que se incluyó como hechos constitutivos del delito, los graves atentados contra la integridad física o mental de los miembros del grupo (Amnistía, 2002). Situación que se resalta cuando en 1998, la primera condena dictada por el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda reconoció la violación como acto constitutivo de Genocidio. Logrando el castigo ejemplar a través de la cadena perpetua a este tipo de atrocidad tantas veces ocurrida durante el desarrollo del conflicto.

El mencionado tribunal penal para Ruanda, se creó el 8 de noviembre de 1994 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Su sede se ubicó en Arusha, Tanzania y su presidente fue Erik Mose de Noruega. Su objetivo principal, al igual que el de sus antecesores

como el Tribunal Penal para Nuremberg, Tokio y los Balcanes, fue juzgar y condenar individualmente a los autores del Genocidio, figura hoy claramente definida por el Estatuto de Roma (2002) en su artículo sexto cuando dice:

“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “Genocidio” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”. Y los crímenes contra la humanidad allí realizados, y que igualmente los contempla el Estatuto de Roma, en su artículo séptimo, de los cuales claramente se perpetraron los siguientes: a) Asesinato; b) Exterminio: “Comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”; c) Esclavitud: “Se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de alguno de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños”; d) Tortura: “Se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas”; e) Persecución: “Se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del Derecho Internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad”; f) Entre otros.

Se resalta su importancia porque, entre otras decisiones, ordenó la detención de más de quinientas personas y, lo más importante,

reconoció la violencia sexual como acto constitutivo de Genocidio, al entenderse como: “una medida dirigida a impedir nacimientos en el seno del grupo” (CICR, 1948). Decisiones que no les devolverá la vida a las miles de personas que allí perecieron, ni borrará las secuelas emocionales de las mujeres violadas, o los niños mutilados o el sida presente hoy en día en quienes antes estaban sanas.

Estos Tribunales *Ad Hoc* se consagran actualmente como los antecedentes de la Corte Penal Internacional, legislado por el Estatuto de Roma. Máximo organismo Internacional de Competencia penal, establecida en tres conductas específicas, definidas por Amnistía Internacional (2006), como: a) Genocidio: cualquiera de ciertos actos específicos, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso; b) Crímenes de Guerra: cualquiera de las infracciones graves de las leyes, que rigen los conflictos armados, cometida en el contexto de un conflicto armado de índole internacional o no internacional; y c) Crímenes contra la Humanidad: cualquiera de los actos prohibidos en referencia a la violación, otros actos de violencia sexual y todos los que atenten contra la dignidad del Ser Humano, cometido como parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil.

Competencia que logra restablecer el orden desde la ideología de haber pagado la deuda a la sociedad a través de la sanción establecida a una actuación, perpetrada contra ella, en el desarrollo de un conflicto armado de índole interno o internacional; y se fortalece en el escenario de postconflicto como un instrumento de sostenimiento de la paz, al no dejar impune los delitos ni los individuos que los cometieron. Vislumbrando la necesidad de los Estados de aplicar el Derecho Internacional de manera coherente con sus principios constitucionales.

Dichos tribunales se consolidan en un organismo de gran importancia y trascendencia para la Comunidad Internacional, la Corte Penal Internacional, regida por el nombrado Estatuto de Roma, toma fuerza y vigencia al momento en que tipifica los ataques contra las misiones de mantenimiento de la paz como violaciones graves a

las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales (Liñan, 2008). Estableciendo todas las violaciones al marco legal del derecho como elementos integradores de los llamados Crímenes de Guerra definidos por la misma norma como todas aquellas violaciones a los Cuatro Convenios de Ginebra y sus dos protocolos adicionales.

6. PROYECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MECANISMOS ORIENTADOS A FAVORECER LA PAZ, LA SEGURIDAD Y DEFENSA EN UN MARCO DE POSTCONFLICTO

Los Derechos Humanos, como se evidenció anteriormente, son elementos fundamentales para generar una estabilidad propia en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, y con ello, favorecer a la aplicación de este en el Postconflicto. Un elemento central para que se procure el cumplimiento del Acuerdo y se promueva una aplicación efectiva en el marco del Postconflicto es el periodo de “Transición”, el cual, está fuertemente respaldado por la justicia, las instituciones, y por la Fuerza Pública. Estos tres ejes constituyen un fuerte respaldo a la promoción y garantía de los Derechos Humanos y al reforzamiento por parte del Estado de la estabilidad para garantizar la Paz y con ello fortalecer la Seguridad y la Defensa Nacional.

En Colombia, según cifras del Registro Único de Víctimas -RUV- hasta el año 2016, se han vulnerado en medio del Conflicto Armado Interno los derechos de 7.762.840 millones de personas reconocidas. Dentro de los principales crímenes contra los Derechos Humanos cometidos en medio del conflicto armado se encuentran: el desplazamiento forzado, secuestro, homicidios, tortura, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, violencia sexual y reclutamiento ilícito. Se tiene en cuenta que el desplazamiento forzado es el hecho que ha generado más víctimas a nivel nacional, según el RUV (2016), aproximadamente 6.803.961 personas han sido afectadas por esta situación ³³.

³³ Cifras oficiales Registro Único de Víctimas -RUV-. Más información en: <http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV>

Para contrarrestar ese pasado histórico de violaciones contra los Derechos Humanos -DD.HH.- en medio del conflicto armado en Colombia, se hace necesario que se apliquen una serie de medidas como las empleadas hasta el momento, entre las que se resalta el cese bilateral del fuego y de hostilidades entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y las Fuerzas Militares orientadas por el Gobierno Nacional; y las proyectadas para el futuro por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos, quien ha sido el mandatario que ha impulsado de manera central la finalización del conflicto armado y ha promovido un escenario de paz, seguridad y estabilidad en el país. En este escenario de Postconflicto, se promueve la protección efectiva de los Derechos Humanos. Dentro de estas medidas propuestas por el Estado, se encuentra en tres ámbitos específicos a nivel jurídico, político-institucional y, principalmente, militar. Para ello, se proponen elementos fundamentales en cada ámbito como la Justicia Transicional; la guía por medio del Plan Nacional de Desarrollo -PND- “Todos por un Nuevo País” 2014–2018 y el reforzamiento institucional a través de las “infraestructuras para la paz”; y el papel fundamental de la Fuerza Pública proyectada a través de la Política de Seguridad y Defensa para la Nueva Colombia 2014–2018, respectivamente.

6.1. PERIODO DE TRANSICIÓN

La transición se constituye como un momento propio de un proceso de transformaciones, en el que se transita de un estado de guerra y violencia a un escenario de acciones dirigidas a promover la paz, la estabilidad y el fortalecimiento de la democracia. En el caso colombiano, se puede señalar la transición como los momentos propios que permiten pasar de un conflicto armado interno a un escenario que propicie la reconciliación nacional y se generen unas garantías de no repetir los hechos acontecidos de violencia. La salida propuesta por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos fue fundamentalmente política, ya que se basó en mecanismos de negociación y concertación para darle solución al conflicto armado. El papel de la Fuerza Pública se constituye primordialmente para que se genere un espacio de estabilidad y seguridad en el territorio nacional.

Las transiciones a la democracia, a nivel general, se consideran como el paso de un régimen a otro, en su mayoría tipo autoritario que transita a uno democrático. Según O'Donnell & Schmitter (1986), se cataloga a la transición como el intervalo de un régimen político a otro.

En el caso de los conflictos armados, Alejo Vargas (2015), cataloga académicamente a la transición como “el intervalo existente entre el momento en el que el régimen anterior, en este caso el periodo de enfrentamientos armados entre el Estado y las insurgencias, empieza a quedar atrás y se inicia el tránsito hacia una nueva sociedad”. En ella, la resolución de los conflictos ya no pasa por la vía violenta sino se proponen medios alternativos basados en mecanismos de concertación como el diálogo y la negociación que se concreta por medio de un Acuerdo o Pacto político que establece una serie de medidas para que se genere la transición. Se tiene en cuenta que en el escenario posterior al proceso transitorio se pueden seguir manifestando hechos delictivos arraigados a otros elementos de violencia como el caso de la manifestación continua de colectivos ilegales - delincuenciales como los Grupos Armados Organizados -GAO- y los Grupos Delictivos Organizados -GDO-³⁴ y acciones perpetradas por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional -ELN-, entre otros.

Con el fin de garantizar los DD.HH., dentro del proceso de transición del conflicto armado a la democracia, se hace necesario el fortalecimiento de una serie de elementos para que se lleve a cabo la transformación tanto a nivel interno en el país y que repercuta a nivel externo. Dentro de ellos se encuentran dos elementos centrales:

a) El fortalecimiento del Estado, como garante de derechos y deberes

³⁴ Con la Directiva 15 del 22 de abril de 2016 promulgada por medio del Ministerio de Defensa Nacional se reconoció el crecimiento de las Bandas Criminales -BACRIM- y se dio un renombramiento de las mismas denominando a estas estructuras como Grupos Armados Organizados -GAO- y Grupos Delictivos Organizados -GDO-. Las GAO operan bajo la dirección de un mando y ejercer un control del territorio que les permitan mantener operaciones militares. Las GDO se definen como un grupo estructurado que actúe con el propósito de cometer delitos graves o tipificados en la Convención de Palermo, con miras a obtener un beneficio material o económico (Ministerio de Defensa Nacional, 2016).

de los ciudadanos, promoviendo las instituciones democráticas con el fin de brindar respeto y protección a los Derechos Humanos; y b) el fortalecimiento de políticas y medidas específicas para contrarrestar las consecuencias derivadas de esta problemática centradas en mitigar las afectaciones causadas por la violencia y, principalmente, hechos arraigados del conflicto armado; y con ellas, generar las condiciones para la construcción de una paz estable y duradera (DNP, s.f.).

6.2. EJES CENTRALES DE LA TRANSICIÓN AL POSTCONFLICTO

Para generar un escenario de estabilidad en el Postconflicto se hacen necesarias una serie de acciones encaminadas a respaldar la transición y con ella, los Derechos Humanos. Para desarrollar lo anterior, se enuncian tres ámbitos principales con las respectivas medidas establecidas.

a) *Ámbito jurídico*: Justicia Transicional. Se tiene en cuenta que, en un contexto de conflicto armado se cometen graves faltas a los Derechos Humanos, por lo cual, el Estado debe llevar a cabo acciones encaminadas a investigar, juzgar y sancionar las acciones irregulares según los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario -DIH- y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos -DIDH- (FIP, 2016). En el caso colombiano se crea un ámbito especial denominado Justicia Transicional. En este se condensan una serie de normativas guiadas a favorecer el fin del conflicto, garantizar una transición de un pasado de violencia a un devenir de reconciliación nacional y, a su vez, juzgar crímenes y delitos acaecidos en medio del conflicto armado en contra de los DD.HH.

Como medida de reparación integral a las víctimas del conflicto armado y para garantizar la justicia se establece la justicia transicional, que sugiere unos “procesos de transición de un conflicto armado a la paz” (ICTJ, 2015), la cual denota las principales medidas judiciales, políticas e institucionales que se proponen implementar para garantizar la restauración y reparación de los Derechos Humanos violados, tanto a las víctimas como a la sociedad en general. De esta

manera, hacer justicia para lograr la reconciliación y el mantenimiento de la paz. La Justicia Transicional abarca unas medidas, “entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales” (ICTJ, 2015).

La reparación³⁵ a las Víctimas³⁶ se entiende como un mecanismo de compensación frente a los daños causados en el contexto del Conflicto Armado Interno. Esta, se realiza por medio de procedimientos que puede ser de manera individual, colectiva, material o simbólica. La Justicia Transicional como garantía de reparación en este caso, de las consecuencias del Conflicto Armado Interno, se considera bajo la mirada de Rodrigo Uprimny (2006), como:

[...] los procesos a través de los cuales se realizan transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, bien por la finalización de un conflicto interno armado y la consecución de la paz. Los procesos de justicia transicional enfrentan importantes dilemas, originados todos en la compleja necesidad de equilibrar los objetivos contrapuestos de justicia y paz. (p. 13)

Este mecanismo se orienta principalmente, como afirma Esteban Cuya, a la búsqueda de la verdad, la aplicación de la justicia contra responsables de penas de violación de DD.HH., establecimiento de normativas sobre justicia como la Ley 975 de 2005 o también llamada Ley de *Justicia y Paz*³⁷, *modificada posteriormente por medio*

³⁵ Según la Ley 975/2005, en el Artículo 8, define la Reparación como un “derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición”. (Rettberg, 2008)

³⁶ Según la Ley 975/2005, en el Artículo 5, se entiende por Víctima a la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales”. (Rettberg, 2008)

³⁷ La Ley de Justicia y Paz dictamina las disposiciones para lograr la reincorporación de miembros de grupos armados organizados que se encuentran al margen de la ley, con el fin de contribuir a la consecución de la paz nacional, tiene como objeto facilitar los procesos de paz. (Congreso de la República de Colombia, 2005)

*de la Ley 1592 de 2012;*³⁸ *la Ley 1448 de 2011 también nombrada Ley de Víctimas y Restitución de tierras*³⁹ y medidas de reparación a nivel material o moral (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición y reformas institucionales) (Cuya, 2011).

Como parte clave del proceso, se hace necesario el esclarecimiento de los hechos y el conocimiento de la verdad de los crímenes y las situaciones acontecidas en medio del conflicto armado. Se tiene en cuenta que “la verdad es un mecanismo de reparación y esclarecimiento de los hechos, propio de los mecanismos judiciales. En procesos de transición [...] se suelen emplear mecanismo extrajudiciales dentro de los que sobresalen las comisiones de la verdad” (FIP, 2016).

Según relata un Informe de la Fundación Ideas para la Paz, en el 5to. punto de la Agenda de negociación se concretó la creación de un “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” -SIVJRNR-. En este se propone la creación de varios mecanismos orientados a garantizar los derechos de las víctimas y promover la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de la vulneración de sus Derechos Humanos (FIP, 2016). Dentro de ellos se encuentran: a) Una Jurisdicción para la Paz –JEP-; b) Una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; c) Una Unidad Especial para la Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas; d) Unas Medidas de Reparación Integral para la Construcción de Paz y Garantías de No Repetición.

³⁸ Se modifica la Ley 975 de 2005, con la cual se dictan “disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley”. (Congreso de la República de Colombia, 2012)

³⁹ Por medio de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se promueven una serie de medidas en busca de garantizar atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno. Se reconoce el derecho propio que tienen las víctimas para que se dé el esclarecimiento de los hechos y conocer la verdad y según ello, ser reparadas de manera integral (Congreso de la República de Colombia, 2011)

b) *Ámbito Político-Institucional: Política de Gobierno e “Infraestructuras para la Paz” - Plan Nacional de Desarrollo: todos por un Nuevo País 2014 -2018.* Mediante el Plan Nacional de Desarrollo –PND-: Todos por un nuevo País 2014-2018, establecido por el Presidente Juan Manuel Santos, se condensan tres pilares fundamentales para el desarrollo del Estado, los cuales son: a) la equidad; b) la educación; y c) la paz. “El Plan refleja la voluntad política del Gobierno para construir una paz sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos” (DNP, s.f.). Se tiene en cuenta de manera enfática el pilar de la “PAZ”, en el cual, se proponen acciones para dar por finalizado el conflicto y favorecer un escenario de estabilidad, en el cual, se garanticen los DD.HH. de la población.

Los enfoques propios del documento de gobierno se encaminan a promover la consecución de la paz por medio de la aplicación del Acuerdo de negociación consolidado entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional de Santos, por medio del cual se propone lograr la deslegitimación de la violencia y la validación de la democracia y, con ello, proyectar medidas orientadoras para generar transformaciones en el marco del Postconflicto.

En las bases del PND se señala como un obstáculo para el desarrollo la situación de conflicto armado que se ha vivido en el país, argumentando que no puede haber prosperidad sino hay paz. De esta manera, se determina que la violencia afecta la calidad de vida de la población, y además de ello, tiene consecuencias directas en el ámbito económico ya que desestimula la inversión y, por ende, afecta el crecimiento del país.

En el PND se reconocen tres elementos principales entorno a la situación de los Derechos Humanos en el país. En primer lugar, la existencia de “deficientes niveles de conocimiento y apropiación de los Derechos Humanos por parte de los ciudadanos y de los servidores públicos. En segundo lugar, la “frecuente justificación de disposiciones y actitudes hacia la violación de los Derechos Humanos”. Finalmente, la “inexistencia de espacios que propicien la convivencia pacífica y la

transformación de los conflictos en el seno de las comunidades” (DNP, s.f.).

Adicional a lo anterior, se enfatiza en la problemática arraigada a los grupos y poblaciones vulnerables específicas, los cuales se enfrentan de manera más cercana con actitudes de discriminación racial y étnica, manifestada en acciones como el desplazamiento producto del despojo, la falta de garantías para el mantenimiento de su cultura y tradiciones, la inequidad presente en el acceso a bienes y servicios y, de igual forma, al acceso al trabajo. Dentro de los grupos vulnerables se encuentra también la discriminación por motivos de género, las acciones en su mayoría son cometidas en contra de las mujeres en ámbitos relacionados con su autonomía económica, la participación en escenarios de poder y en espacios de toma de decisiones (DNP, s.f.).

Por otra parte, la Constitución Política de Colombia de 1991 se determina como una “Constitución para la Paz”, en la cual se establece la noción de la paz desde un triple carácter: En el Preámbulo, se establece como valor de la sociedad y fundamento del Estado Social de Derecho y de los Derechos Humanos; como principio, que dirige el actuar de las autoridades públicas (Art. 2); y como derecho fundamental, que orienta las acciones de los ciudadanos (Art. 22) (DNP, s.f.).

“*Infraestructuras de Paz*”. El PND indica la existencia de “infraestructuras de paz”,⁴⁰ que se proponen como mecanismos estabilizadores dentro del proceso de transición del conflicto armado al fortalecimiento de la democracia y, por ende, la consolidación de la paz. Con el establecimiento de estos espacios permanentes se permitirá mantener una vigilancia efectiva y consolidar los Acuerdos, dotándolos de legitimidad, autoridad y recursos (Pfeiffer, 2014). Dentro del entramado general de estas infraestructuras se pueden encontrar:

⁴⁰“Según el PNUD, “es una red interdependiente de sistemas, instituciones, recursos y habilidades sostenido por el gobierno, a la sociedad civil y las comunidades que promueve el diálogo y la consulta, previene los conflictos, y facilita la mediación pacífica cuando la violencia ocurre en una sociedad”. (Pfeiffer, 2014)

Comités, Consejos, Secretariados, Entidades, Comisiones de Verdad, entre otras, que se encuentran en pro de la paz.

La paz en Colombia se consolida en el proceso de transición como un factor que genera estabilidad en el país, y por ende, desarrolla un ambiente que permite garantizar los DD.HH. de todos los ciudadanos, haciendo énfasis en las víctimas afectadas del conflicto armado interno.

En cuanto a Colombia, se han derivado varias infraestructuras a partir de la Ley de Justicia y Paz y de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras debido a la iniciativa reconocida en el país propuesta por parte de la población como los Programas Regionales de Desarrollo y Paz⁴¹ que se mantienen vigentes. La sociedad civil también ha generado un aporte fundamental en la salvaguardia de los DD.HH. y DIH por medio de organizaciones propias surgidas en torno al tema humanitario: La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-.

A nivel institucional, por medio del Estado, se han creado y mantenido una serie de entidades encaminadas a promover la protección de los DD.HH. para el Postconflicto. Dentro de estas se encuentran: a) La Defensoría del pueblo creó en 1988 el Sistema de Alerta Temprana -SAT-⁴²; b) El Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,⁴³ y c) La Unidad Nacional de Protección -UNP-, que se encuentra vinculada al Ministerio del Interior.⁴⁴

⁴¹ Ciudadanos de todo el territorio nacional impulsaron este tipo de red con el fin de constituir un mecanismo que logre promover una garantía efectiva de los DD.HH. en el país, en donde se procure por una “Colombia en paz, construida desde las Comunidades Locales y desde las Regiones”. (REDPRODEPAZ, 2002)

⁴² Diseñado con el fin de “monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo de la población civil por los efectos del conflicto armado interno y promover la acción de prevención humanitaria con el ánimo de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas” (Defensoría del Pueblo, s.f.)

⁴³ El Programa se encarga de “monitorear las violaciones de los DD.HH. y el DIH e impulsar políticas públicas de prevención y atención”. (Pfeiffer, 2014)

⁴⁴ La UNP se encarga de promover los programas de protección y apoyo a la prevención y con ello promover los Derechos Humanos principalmente la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas. (UNP, 2016).

Desde el Departamento de Prosperidad Social⁴⁵ -DPS-, adscrito a la Presidencia, y promovido a partir de la Ley de Víctimas se crearon: a) El Centro Nacional de Memoria Histórica,⁴⁶ y b) El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV-⁴⁷.

El Marco Legal para la Paz o también llamado Marco Jurídico para la Paz (2012), es la norma principal que conforma la base legal para que se establecieran las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, en lo relacionado con justicia transicional y para su garantía establece la creación de una Comisión de la Verdad. Por medio de este, “busca abrir un espacio constitucional para el desarrollo de una estrategia integral y coherente de justicia transicional que permita la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas y la transición hacia una paz estable y duradera” (Justicia Transicional, s.f.).

Con el fin de fortalecer la protección y garantía de los DD.HH., desde el PND se promueve la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La verdad como mecanismo de reconocimiento del daño. En cuanto a la justicia, se fortalecen los mecanismos propios de la Justicia Transicional para aplicar de manera equilibrada la justicia frente a los delitos cometidos por las partes del conflicto, principalmente la guerrilla de las FARC. La reparación como condición básica para resarcir los daños causados. La reconciliación como motor de transformación de la sociedad y las garantías de no repetición para un futuro estable y libre de acciones derivadas del pasado de conflicto armado (DNP, s.f.).

c) *Ámbito militar: la Fuerza Pública en el Postconflicto. Política de Seguridad y Defensa para la Nueva Colombia 2015–*

⁴⁵ Tiene la Misión de “diseñar, coordinar, e implementar políticas públicas para la inclusión social y la reconciliación”. (DPS, s.f.)

⁴⁶ El Centro recoge la memoria histórica, y con ello se encarga de divulgar una narrativa sobre el conflicto armado.

⁴⁷ Que se encarga de materializar la Ley de Víctimas y promover la participación de estas.

2018. Derivado de lo anterior, el Ministerio de Defensa liderado por el Ministro Luis Carlos Villegas Echeverri, formuló la Política de Seguridad y Defensa -PSD- para la Nueva Colombia 2015–2018, basada en el marco de referencia dado por el PND, que se desarrolla en el Postconflicto como medida para garantizar la paz, la seguridad, la soberanía nacional y los DD.HH.

La PSD en el ámbito interno se encamina a garantizar la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la defensa nacional; y frente a estas, enfrentar los retos que se presenten en cuanto a la delincuencia civil, el narcotráfico, la violencia, la lucha contra el crimen y los delitos derivados que se lleguen a manifestar. Con el Proceso de paz y la concretización de este en el Acuerdo de negociación, se “generó un cambio de prioridades y percepción en materia de seguridad ciudadana” (Ministerio de Defensa Nacional, 2015).

En el sector Defensa, se tiene como principal eje fortalecer a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, con el fin de “enfrentar escenarios marcados por una conflictividad que podría llegar a ser armada y frente a la cual se requeriría de una capacidad de respuesta eficaz. Las capacidades operacionales y organizacionales de la Fuerza Pública deberán continuar fortaleciéndose para apoyar la construcción de la paz” (Ministerio de Defensa Nacional, 2015). Para lograr obtener este fortalecimiento del cuerpo de la Fuerza Pública se propone como objetivo central de la PSD, “coadyuvar a la terminación del conflicto armado, la consolidación de la paz, el desarrollo socioeconómico, la defensa de los intereses nacionales y el mejoramiento de la seguridad pública y ciudadana, mediante el mantenimiento de una Fuerza Pública moderna, fortalecida, motivada y operativa” (Ministerio de Defensa Nacional, 2015).

El papel de la Fuerza Pública es necesario para la transición del conflicto a la paz, para que se vele por el cumplimiento del Acuerdo pactado, ya que contribuye a la construcción y mantenimiento de un entorno apto para el pleno goce de los derechos de los residentes en el territorio nacional (Ministerio de Defensa Nacional, 2015). Se hace

énfasis en que en el Postconflicto, la Fuerza Pública orientará sus acciones no solo a favorecer un escenario de paz y estabilidad sino a seguir en la lucha continua del Crimen Organizado y Grupos Armados al Margen de la Ley, principalmente las GAO. Su accionar también estará encaminado en fortalecer el control del territorio nacional, con el fin de garantizar la integridad y soberanía nacional.

En cuanto a los Derechos Humanos, por medio de la PSD se promueve “una sociedad equitativa en donde los habitantes gozan de los mismo derechos y oportunidades, permitiendo la convivencia pacífica” (Ministerio de Defensa Nacional, 2015). Los DD.HH. se constituyen como un principio de la PSD, el cual se denomina “legitimidad, respeto y garantía de los Derechos Humanos”, en el que se hace énfasis en la legitimidad como centro de gravedad del Estado, y junto a ello, se hace necesaria la confianza de los ciudadanos, su consentimiento de poder ejercitó a través de las instituciones y la Fuerza Pública. “Ello implica el compromiso de la Fuerza Pública para obrar en estricta sujeción a la Constitución, la ley y con plena observancia de los DD.HH. y el DIH” (Ministerio de Defensa Nacional, 2015).

La PSD se orienta en el respaldo y cumplimiento de la “Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”⁴⁸ y de la política “Cero Tolerancia”⁴⁹ a violaciones de DD.HH. En caso de que se presenten presuntas violaciones a los DD.HH. y el DIH se afianza la cooperación con autoridades judiciales y organismos nacionales e internacionales.

⁴⁸ La Política Integral de DD.HH. y DIH, propuesta por el Ministerio de Defensa en el año 2008, está encaminada en cinco líneas de actuación “Instrucción, Disciplina, Defensa, Atención y Cooperación, con el fin de transversalizar los Derechos Humanos, prevenir su violación y/o infracciones al Derecho Internacional Humanitario” (Ministerio de Defensa Nacional, 2014)

⁴⁹ “La tolerancia cero es un enfoque de política de seguridad ciudadana que se basa en castigar severamente cualquier infracción legal sin importar la importancia de la falta cometida... la tolerancia al delito es eliminada, por lo que no se tienen en cuenta circunstancias atenuantes a la hora de castigar faltas o delitos. La expresión “Tolerancia Cero o Cero tolerancia” suena como una especie de actuación autoritaria y represiva, pero su contexto original es más bien fomentar la promoción de condiciones sociales de buenas costumbres y seguridad”. (IPACITEFO, s.f.)

6.3. FUERZA PÚBLICA, SU PAPEL EN EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE PAZ Y DE LOS RETOS PARA EL POSTCONFLICTO

Acuerdo de Paz. La Fuerza Pública, principalmente las Fuerzas Militares, ocupan un papel fundamental en el proceso de consecución del Acuerdo⁵⁰ pactado entre el Gobierno Nacional y las FARC, y en el cumplimiento de los puntos de este, relacionado con el fin del conflicto.

- *Primer punto: Política de desarrollo agrario integral.* Dentro de esta, se condensan una serie de medidas a cumplir que tienen por objetivo promover una economía solidaria y cooperativa, brindando protección a lo rural y a la población campesina. A su vez, el apoyo a los planes de desarrollo de lo rural se hace vital con el ánimo de mantener la lucha contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos.

- *Segundo Punto: Participación política.* En este punto la vinculación de la Fuerza Pública es limitada, se prevé un apoyo encaminado a garantizar esta participación como elemento fundamental de la democracia.

- *Tercer Punto: Fin del Conflicto.* Su participación se ve encaminada a promover y vigilar el cese bilateral del fuego y de hostilidades entre la Fuerza Pública y las FARC, con el ánimo de establecer escenarios de paz. A su vez, se hace necesaria una vinculación efectiva en el proceso de desmovilización, dejación de las armas y reintegración por parte de las FARC. De manera simultánea, el Gobierno Nacional, por medio de la Fuerza Pública, está encaminado a fortalecer y ejecutar acciones que contrarresten los hechos de violencia contra los DD.HH. por parte de organizaciones criminales. De esta forma, se promueve la garantía de seguridad en el territorio nacional.

⁵⁰ Los Puntos fueron tomados del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” publicado en la página oficial de internet de la Mesa de Conversaciones. Mayor información en: <https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf>

- *Cuarto Punto: Solución al problema de las drogas ilícitas.*

La erradicación de cultivos ilícitos y control del microtráfico derivado del problema de las últimas décadas del país: el narcotráfico. Sigue siendo una labor propia de la Fuerza Pública. También, derivado de esto, contrarrestar a las organizaciones y redes criminales que lideran esta actividad ilícita y los crímenes que se derivan de esta. Para cumplir con esta tarea, debe haber un control efectivo del territorio que impida el establecimiento de otros grupos criminales en zonas propensas al desarrollo de cultivos ilícitos.

- *Quinto Punto: Víctimas.* La tarea de cooperar para el esclarecimiento de los hechos y el conocimiento de la verdad es fundamental y frente a esto, se hace necesaria la intervención en la labor de brindar protección a las víctimas, los testigos y los miembros que intervienen en este proceso de reparación.

- *Sexto Punto: implementación, refrendación y verificación.* La Fuerza Pública debe procurar por mantener un escenario de seguridad y paz en donde la protección de los ciudadanos es fundamental y, por ende, sus DD.HH. Dentro de este sexto punto, la participación de la Fuerza Pública debe estar orientada en el apoyo a la Misión de Paz de la Organización de las Naciones Unidas -ONU- establecida por medio de la Resolución S/RES/2261 (2016) proferida por el Consejo de Seguridad, que determina que esta Misión va a estar liderada por Jean Arnault, y la cual tiene por objetivo la observación y verificación del cumplimiento del Acuerdo de Paz en Colombia. Esta Misión forma parte de un mecanismo tripartito de vigilancia conformado por el Gobierno Nacional, las FARC y la Misión (ONU, 2016).

Retos en el Postconflicto. Tomando la PSD como base, se pueden determinar una serie de retos que tendría que desempeñar la Fuerza Pública en un escenario de Postconflicto para garantizar la protección de los DD.HH., ya que es evidente que van a seguir sucediendo hechos delincuenciales y violentos en contra de estos.

Dentro de los principales retos que tiene que enfrentar la Fuerza Pública se encuentran focalizados, según la PSD, en el sector urbano (seguridad ciudadana), sin dejar de lado lo rural, enfrentando varios crímenes contra los DD.HH. que se concentran en: a) Las Redes y organizaciones criminales enfocándose en las GAO, las cuales dentro de su accionar cometen graves delitos en contra de los DD.HH.; b) El Narcotráfico, microtráfico, cultivos ilícitos y lavado de activos (financiación del terrorismo); c) A nivel ambiental: la minería ilegal, la minería criminal, la explotación ilícita de recursos naturales; d) La inseguridad ciudadana debido a la delincuencia común; e) Ciberdelincuencia; y f) Delitos: homicidios, secuestros, extorsiones.

El Sector Defensa, en la PSD, define los siguientes retos puntuales para la Nueva Colombia en el Posconflicto: a) Promover una cultura ciudadana y cívica; b) Prevenir la aparición y/o reincidencia de nuevos actores criminales; c) Fortalecer el Estado de Derecho para garantizar el imperio de la ley y la justicia; d) Mejorar el papel de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación; e) Promover la legalidad, el respeto y la convivencia como base de las relaciones en la sociedad; f) Desarticular economías ilegales; g) Robustecer acciones preventivas, de comunicación y protección con el apoyo de la ciudadanía; y h) Combatir el crimen y la delincuencia a partir del fortalecimiento de la Fuerza Pública (Ministerio de Defensa Nacional, 2015).

7. CONCLUSIONES

Finalmente, se puede denotar que, para el periodo del Posconflicto, los Derechos Humanos van a ser el punto fundamental en el proceso de implementación, en principio del Acuerdo Final y posteriormente de la normativa que se derive para la Reparación efectiva de las Víctimas. Es importante que las normas mencionadas anteriormente se ejecuten y no se queden en medidas formales, el propósito fundamental es que se manifieste la verdad, justicia y reparación para que se pueda lograr una Reconciliación Nacional.

La Misión de paz de la ONU, es un factor fundamental para que se dé el proceso de reintegración y desmovilización de los guerrilleros de este grupo armado ilegal. De igual manera, para que mediante el monitoreo se promueva un cumplimiento efectivo del Acuerdo Final y con ello se garantice la seguridad y la paz a nivel interno.

Cabe resaltar, que las Negociaciones de paz materializadas en el Acuerdo Final con las FARC, representan un gran avance para la terminación del Conflicto Armado Interno. De igual manera, hay que tener en cuenta que se mantiene vigente en menor magnitud con el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y otros grupos disidentes, lo cual sigue representando una amenaza latente en contra de la población civil y por lo tanto un asunto propio de la Fuerza Pública para la garantía de la Seguridad, junto con los retos planteados en la PSD enfatizando en el narcotráfico.